

importa la violacion del art. 16 de la Constitucion federal.

Por todas estas razones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que ampara al C. Diputado Evaristo Esquivel.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el To- ca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordáz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 6 de 1874.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Lic. Eugenio Acha, en representacion de D. Domingo Narvarte, contra el C. Administrador de Rentas de Ario, que le cobra el seis por ciento sobre precios de tarifa, por ciento cuarenta piezas de manta que introdujo de la fábrica de Salvatierra del Estado de Guanajuato.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Lic. Eugenio Acha, en representacion acreditada de D. Domingo Narvarte, del comercio de Ario, hace presente á este

Juzgado en su escrito de 29 de Diciembre próximo pasado: que habiéndosele consignado á su representado por la fábrica de mantas de Salvatierra, en el Estado de Guanajuato, las ciento cuarenta piezas que recibió en Ario, bajo la guía número 519, segun aparece del certificado que se acompaña, el Administrador de Rentas del lugar le exigió el impuesto decretado en la fraccion 5ª del artículo 1º de la ley del Estado de 31 de Julio del año próximo pasado, que gravó con el seis por ciento sobre precios de tarifa y como efectos nacionales, el algodón, lana y seda, y las manufacturas procedentes de estas materias; que como este decreto se opone abiertamente al que expidió el Congreso general en 1º de Mayo de 1868, en el que se prohíbe, que bajo ninguna denominacion, pueda un Estado imponer á los frutos de otro mayores impuestos que los que exija á los suyos propios; no estando gravadas las mantas que se elaboran en esta Capital y siendo por otra parte dicha disposicion legislativa dictada en virtud de la facultad que otorga la Constitucion general en la fraccion 9ª de su artículo 72; y que segun el 126 deben observarse estrictamente las leyes del Congreso general que emanen de la Constitucion, apesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes particulares de los Estados, juzgaba comprendido el caso de que trata en la fraccion 3ª del artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, por lo que pedia se lo amparase contra los actos del Administrador de Rentas de Ario, que le exigió el impuesto de que habla la ley citada del Estado.

Del informe de este empleado, resulta: que la ley de 31 de Julio del año próximo pasado, tiene una aplicacion general, supuesto que se exige el cobro de que habla la fraccion 5ª á los mismos efectos cuando se presentan cubiertos con pases y amparados con guia, sin atender á su origen.

Tal inteligencia dada á la ley, destruye

por su base el argumento capital de la parte quejosa, asegurando á su vez la que informa, que la interpretacion de que hace mérito, es la misma que han formado las Oficinas Superiores é inferiores de Hacienda del Estado, por lo que se asegura en el párrafo 7º del informe, que los productos de la fábrica de mantas de la Paz establecida en esta Ciudad, así como la primera materia que á ella se destina, pagan la contribucion señalada en la fraccion 5ª del artículo 1º de la ley citada, así como tambien las mantas que elaboran en varias poblaciones del Estado, las personas que se consagran á esta industria.

De este pago solo se exceptúa por concesion del Gobierno, el algodón que cosechado en territorio del Estado; se consume en la nueva fábrica de La Union. (Decreto del Congreso del Estado de 2 de Febrero de 1871.) Las razones que para esta escencion pudieron influir en la Legislatura, las sigue manifestando la parte informante hasta la conclusion de su párrafo 11.

Si el C. Administrador se hubiera limitado á lo expuesto, habría evidentemente nulificado la pretension de la parte quejosa, porque de lo confesado hasta aquí en el informe, no resulta en manera alguna demostrada la pugna de que hace mérito el representante de Narvarte entre la ley del Estado y la general emanada de la Constitucion.

Pero el C. Administrador continúa informando, que si en algunos casos las mantas de Michoacan se encuentran cubiertas con guias ó pases libres, esto no debe atribuirse á la ley de 31 de Julio de 1873 que grava con unos mismos derechos las del Estado y las que se importan de otros, sino á los principios generales que rigen en el cobro de las contribuciones indirectas. Estos principios los halla consignados en la ley general de 11 de Julio de 1843 que se declara vigente para la exaccion de la alcabala, y con fundamento de la fraccion 4ª de su artículo 4º sostiene que no aducan dicha cuota los gé-

neros, frutos y efectos, que habiéndola satisfecho se vuelven á vender cuando han mudado de forma, ó variado de especie ó de calidad.

En el ejemplo que se pone sobre que las mantas de Michoacan no causan el repetido impuesto, toda vez que se halla pagado por la materia prima, que es el algodón, se demuestra de la manera mas patente, la ninguna aplicacion que se hace al caso de que se trata, de la ley de 31 de Julio de 1873, que no solo grava la primera materia, sino igualmente las manufacturas. Se añade en seguida, que las mantas de otros Estados causan en las de Michoacan, el seis por ciento por no haberse impuesto sobre el algodón, y de aquí se parte para exigir á las mantas importadas, el derecho referido.

Es tan notoria la desigualdad que se introduce en la exaccion de este impuesto con la aplicacion de los principios á que se refiere el C. Administrador, que desde luego se palpan el desnivel y gravámen que para el comercio de Estado á Estado quizo evitar la ley general de 2 de Mayo de 1868. La adjunta planilla que se ha formado con todos los datos conducentes al esclarecimiento de la cuestion, y en la que no se comprende el derecho adicional, patentiza hasta la evidencia lo que acaba de asentarse. En efecto, mientras á las mantas de Michoacan se les exige tan solo el impuesto relativo al algodón, las de otros Estados tienen que cubrirlo en su calidad de tejido, y bien se vé la diferencia marcada por la tarifa, al hacer el aforo, considerando por una parte la materia primera y por otra la manufactura. Si las mantas del Estado pagan únicamente el seis por ciento sobre el algodón de que se usa, no hay razon legal para que las de otros Estados cubran el mismo impuesto en su calidad de manufacturera.

He aquí precisamente marcada la notable diferencia que engendra el desnivel en el comercio de mantas de este Estado para con otros, en virtud de sus gravosas restricciones. Que las que se importan de otros

Estados, tengan que pagar en Michoacan el seis por ciento sobre la materia primera, nada tendría de particular, supuesto que es el mismo gravámen de las suyas propias; pero aplicar las leyes sobre impuestos, en los términos que lo hace el C. Administrador de Rentas de Ario, es fundar el desnivel mas perfecto en el comercio, introduciendo restricciones onerosas, contrarias á la misma ley del Estado.

A propósito de la importante materia de que se trata, dice el Sr. Castillo Velasco en su obra de derecho constitucional mexicano, que, "la facultad de impedir por medio de bases generales que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones onerosas, es no solo justo, sino necesario para conservar la buena armonía entre los Estados que forman la federación mexicana." Las restricciones onerosas á que se refiere la fracción 9ª del artículo 72 de la Constitución, son aquellas que por el gravámen que produzcan, puedan afectar, perjudicándola, á la producción y al comercio de otro Estado. Es evidente que si la Federación se convirtiera en perjuicio para alguno ó algunos Estados, ellos tendrían el derecho de reclamar, y hasta de separarse de una asociación perjudicial.

Para evitar este mal, así como las reclamaciones que habría necesidad de resolver, y que pudieran afectar hasta la soberanía de los mismos Estados, la justicia y la conveniencia política exigieron que se facultara al Congreso para impedir esas restricciones onerosas; pero esto se ha de verificar por medio de las bases generales y no de otra manera particular, porque habría que constituir al Congreso en poder judicial, peligro que la Constitución ha querido evitar cuidadosamente.

El C. Administrador sigue exponiendo, que la razon de aplicarse en el Estado la ley general de 11 de Julio de 1843, no es otra que la de evitar el duplo, triplo ó aun mas gravámenes que pudieran sufrir los efectos

en virtud de sus trasformaciones; pero este motivo, aun considerado con toda su fuerza equitativa, no justifica el procedimiento empleado, respecto de la exaccion del seis por ciento sobre las mantas de otros Estados. El gravámen que estas reportan, segun lo anteriormente demostrado, queda en todo su vigor, supuesto que no existe respecto de él, la razon de equidad que se ha querido encontrar en la ley de 1843.

Examinado hasta aquí el caso que tiene que resolverse en este Juzgado; sin considerarse si apesar de las prescripciones de la ley del Estado de 31 de Julio de 1873, deba aplicarse á la exaccion del impuesto de que se trata la general de 11 de Julio de 1843 que sustancialmente modifica aquella en el punto de que se trata, por lo que sería cuestion de la competencia de los Poderes del Estado, el Promotor se ha limitado á examinar la cuestion constitucional, partiendo de los hechos capitales que se consignan tanto en el escrito de queja, como en el informe del citado Administrador. Esto supuesto, en la opinion del que suscribe cabe perfectamente bien el amparo que se solicita, por que el procedimiento del empleado, aunque se cree fundado en las leyes que cita, se halla en contravencion con la general de 2 de Mayo de 1868, referente á la fracción 9ª del artículo 72 de la Constitución, y por lo mismo debe, antes que todo, acatarse el 126.

Como una comprobacion de lo que acaba de exponerse, se puede ver la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion de 3 de Febrero de 1871, que se registra á la foja 91 del tomo 1º del Semanario Judicial, y es referente á la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan (foja 89), en un caso exactamente igual al de que se trata en nuestros autos.

Sin ser mas difuso sobre la presente cuestion, y considerando el caso comprendido en la fracción 3ª del artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el Promo-

tor pide, por las razones y fundamentos legales expuestos, se declare: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Domingo Narvarte, contra los actos del C. Administrador de Rentas de Ario, en virtud de los cuales le exigió sobre las mantas importadas de Salvatierra, el impuesto decretado en la fraccion 4ª de la ley del Estado de 31 de Julio de 1873.

Morelia, 6 de Febrero de 1874.—*N. Cuallero*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, 12 de Febrero de 1874.—*Isidro Aleman*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Febrero 11 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Eugenio Acha, á nombre y con poder de D. Domingo Narvarte del comercio de Ario, contra el acto del C. Administrador de rentas de dicha Villa, en virtud del cual se cobra al segundo el seis por ciento sobre precios de tarifa, por ciento cuarenta piezas de manta que recibió de la fábrica de Salvatierra del Estado de Guanajuato, cobro que dicho Administrador hace conforme á la ley del Estado número 113 de 31 de Julio de 1873, invadiendo con esto, según el quejoso, las atribuciones federales, y comprendiendo por lo mismo el caso, en la fraccion 3ª del artículo 1º de la ley Orgánica general de 20 de Enero de 1869.

Considerando: que la fraccion 5ª de la ley del Estado citada, de 31 de Julio del año pasado, impone á los efectos que ella enumera, una contribucion de un seis por ciento sobre precios de tarifa; y que esta contribucion solo se cobra en las Administraciones de rentas de Michoacan, á las mantas que vienen á su suelo de otros Estados de la República, y no á las que producen las fabricas del mismo, cuyo hecho está consignado en el informe del C. Administrador

de Ario, y es ademas público y de una practica constante.

Que esta diferencia en el cobro del impuesto referido, hace que las mantas de otros Estados, al ser introducidas al de Michoacan, paguen mayores contribuciones que las que pagan las mantas que se producen en este, lo que es contrario á la ley de 1º de Mayo de 1868, que ha sido dictada en virtud de la facultad que otorga al Congreso de la Union la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion general.

Que el decreto de Mayo de 68, prohíbe á un Estado exigir á los frutos de otros mayores impuestos que los que cobra á los suyos, y estando demostrado que las mantas de Michoacan no pagan ningun impuesto, ya por escepcion establecida en favor de la industria manufacturera del mismo, ya por omision de los encargados de las gabelas públicas.

Que no puede objetarse que el decreto de 1º de Mayo habla de *frutos*, y que no pueden reputarse como tales las mantas; por que tanto en la acepcion jurídica de esta palabra, como en la gramatical, los artefactos son propiamente frutos; como puede verse en esta palabra, en el Diccionario de Legislatura de Escribiche, y en el del idioma de la Academia española, edicion de París de 1868.

Que la segunda parte de la fraccion 9ª del artículo 72 constitucional, dá al Congreso la facultad de impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones onerosas, y que tal es la que resulta de la desigualdad que proviene de cobrar á las mantas remitidas de Salvatierra, un derecho que no pagan las de Michoacan, por que tal gravámen es una restriccion onerosa para las mantas de Guanajuato.

Que esto es lo que precisamente determina la ley general de 1º de Mayo de 68, al ordenar que un Estado, bajo ninguna denominacion, cobre á los frutos de otro,

mayores contribuciones que á los suyos propios.

Que por lo mismo, el acto del C. Administrador de Ario al cobrar al Sr. Narvarte el seis por ciento sobre precios de tarifa á las ciento cuarenta piezas de manta que recibió de Salvatierra, es directamente, contrario á la ley federal citada que ha querido, consultando los principios de la justicia natural, que los efectos de un Estado corran en el comercio de otro, parejas en estimacion y precio.

Por estas razones y con fundamento del artículo 101 de la Constitucion general, y de la ley de 20 de Enero de 1869, como pide el C. Promotor, se declara: Que la Justicia federal ampara y protege al C. Domingo Narvarte contra el acto del C. Administrador de Ario, que le cobra el seis por ciento por las ciento cuarenta piezas de manta que recibió del Estado de Guanajuato.

Hágase saber; publíquese y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo decretó en definitiva el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Febrero 12 de 1874.—*Isidro Aleman*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 5 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Eugenio Acha, en representacion de D. Domingo Narvarte, ante el juzgado de Distrito de Michoacan, contra el C. Administrador de Rentas de Ario que le cobra el seis por ciento sobre precios de tarifa, por ciento cuarenta piezas de manta que introdujo de la fábrica de Salvatierra del Estado de Guanajuato; visto el informe del C. Administrador de rentas de Ario, en que mani-

fiesta, que el cobro que hace á Narvarte lo apoya en la ley número 113 del Estado de 31 de Julio de 1873; lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el quejoso; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente; se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Michoacan, que declaró: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Narvarte, contra el acto del C. Administrador de Ario que le cobra el seis por ciento por las ciento cuarenta piezas de manta que recibió del Estado de Guanajuato.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*J. Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*Manuel de Oastañeda y Nájera*.—*Ignacio Altamirano*.—*D. Velasquez*.—*M. Zavala*.—*Lic. E. Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 8 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*.